

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE : JULIA ROSA RAMÍREZ GALEANO
DEMANDADO : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
LITISCONSORCIO NECESARIO: PORVENIR S.A.
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-018-2018-00618-01
RADICADO INTERNO : 099-21
DECISIÓN : ADICIONA, REVOCA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO : 137

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE sin efectos o ineficaz la afiliación que contiene el trasladado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, al vincularse a COLFONDOS S.A. el 14 de julio de 1994; que la demandante continua válidamente afiliada al Régimen de Prima Media y sin solución de continuidad. Se CONDENE a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones el saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante, el bono pensional, y toda suma recibida con ocasión del traslado de régimen, con sus correspondientes rendimientos sin ningún tipo de descuento, en especial de gastos de administración. Se CONDENE a Colpensiones a recibir dichos dineros, se incluyan y actualice la historia laboral de la demandante. Y se condene en costas procesales a las demandadas.

Como supuestos facticos con los que sustenta sus pretensiones, narra que ha estado afiliada al Régimen de Prima Media desde el 7 de junio de 1987; se trasladó a COLFONDOS S.A. el 14 de julio de 1994; se trasladó a PORVENIR S.A. y regresó a Colfondos el 26 de diciembre de 2001 y se trasladó a PROTECCIÓN S.A. el 27 de septiembre de 2012. Que existió por parte de COLFONDOS S.A. omisión al explicarle en forma suficiente, amplia y oportuna aspectos relevantes. El 16 de agosto de 2018 le solicitó a Colpensiones la aceptara como afiliada.

Por medio de auto del 22 de octubre de 2019, el Juzgado de conocimiento ordenó integrara a PORVENIR S.A. en calidad de litisconsorcio necesario por pasiva (fl. 167).

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 5 de abril de 2021, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado realizado por la demandante a la sociedad a COLFONDOS S.A. Le ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a efectuar el traslado inmediato a Colpensiones, de todos los valores que hubiera recibido con motivo de su afiliación como cotizaciones, bonos pensionales en caso de existir, los rendimientos que se hubieran causado, sumas adicionales de las aseguradoras y cuotas de administración. Le ORDENÓ a Colpensiones a reactivar la afiliación de la demandante, recibir las sumas indicadas, continuar como su administradora de pensiones y consolidar sus historias laborales. Y condenó en costas en a PORVENIR S.A, COLFONDOS S.A. No impuso costas a Colpensiones y PROTECCIÓN S.A.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. apela parcialmente la sentencia, en lo referente a la orden de trasladar los gastos de administración y seguros previsionales, considerar que no es procedente ordenar su traslado, toda vez que se tratan de conceptos causados durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante y son descuentos realizados conforme a la ley y como contraprestación de la gestión y administración. Que con la orden de devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual, rendimientos y gastos de administración se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones por recibir dineros que no está destinado a reconocer la pensión de vejez, así mismo, porque recibe una comisión de administración por un dinero que no administró y se le está devolviendo los rendimientos generados y los cuales son fruto de la gestión de su representada; que PROTECCIÓN S.A. es quien tiene el derecho a conservar esa comisión como restitución mutua a su favor. Que en caso de reconocer los rendimientos generados y desconocer le derecho que tiene a cobrar la comisión de administración que generan los rendimientos, se contradice porque se estaría reconociendo que la afiliación al RAIS ha tenido efectos.

Frente al seguro previsional, considera que la prima ha sido pagada mes a mes a la aseguradora, por lo tanto, se encuentra en imposibilidad de solicitarla a la aseguradora y trasladarla a Colpensiones, y más porque la aseguradora es un tercero de buena fe.

Frente al 3% destinado a la comisión de administración para financiar las primas del seguro previsional, considera que opera la prescripción porque son conceptos que se descuentan de la periodicidad que impone la ley y no financian la pensión de vejez por lo que son conceptos que prescriben según el art 488 del CST y 151 CPT y SS.

Con la decisión de que su representada asuma con su propio patrimonio los valores descontados por mandato legal para la comisión de administración y primas de seguros, se estaría en presencia de una condena en perjuicio contra el patrimonio de su representad, la cual se tendría que revisar frente a una responsabilidad civil.

En caso de confirmarse la orden de trasladar estos conceptos, solicita se tenga en cuenta que la demandante se vinculó el 29 de septiembre de 2012 con PROTECCIÓN S.A., y en la sentencia no se realizó distinción alguna, entre estos tiempos de afiliación y traslados horizontales realizados por la demandante, sin que haya lugar a devolver conceptos que nunca ingresaron, por el tiempo que no se tuvo relación con la misma.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colfondos presenta alegatos de conclusión solicitando no se ordene a dicha entidad, el traslado de concepto alguno al RPM, teniendo en cuenta que la actora haciendo uso de su derecho de trasladarse horizontalmente entre AFPS del mismo RAIS, se vinculó con Protección y por ende a Colfondos, trasladó a dicha AFP, la totalidad de los recursos que alguna vez tuvo en la cuenta pensional de Colfondos, por tanto; dicha cuenta se encuentra inactiva y con cero recursos para trasladar. De esos conceptos trasladados, hizo parte el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, precisando además que tampoco procede la devolución de los gastos de administración y seguros, ni la indexación de dichos conceptos.

El apoderado de Colpensiones presenta alegatos manifestando con respecto a la declaratoria de la ineficacia que las obligaciones de las administradoras establecidas en la reglamentación que dio desarrollo a la ley 100 de 1993, fue específica sobre el contenido de los formularios de afiliación y los traslados, la Ley, dispuso que para que las AFP pudieran válidamente aceptar un traslado bastaba “la comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, y que para la fecha del traslado se encontraba vigente el Decreto 663 de 1993, por lo que se debe aplicar la normativa vigente para dicha época, no siendo razonable imponer a las AFP cargas adicionales que no se encontraban en las leyes del momento del traslado.

Que, por lo anterior, del análisis de la información suministrada por la AFP sobre el alcance de la asesoría que brindó al momento de la afiliación y del formulario de afiliación que firmó el hoy demandante puede inferirse razonable que existían suficientes elementos de juicio y explicativos sobre los elementos constitutivos del régimen de ahorro individual. Además, en el interrogatorio rendido por el demandante, este es determinante respecto de circunstancias cruciales para reafirmar que no existió tal falta de información o falta de consentimiento que de origen a la ineficacia, puesto que explícitamente confesó que firmó el formulario de afiliación de forma libre, voluntaria y sin presiones, que le explicaron los elementos básicos y las características principales del régimen de ahorro individual con solidaridad, que el acompañamiento de Porvenir fue continuado y constante, que reconoce varias figuras propias de este régimen y que su interés actual de traslado es motivado en un interés netamente económico en relación con la mesada pensional que recibiría.

Así mismo indica que con la declaratoria de la ineficacia se está cargando consecuencias finales a la administradora del régimen de prima media, en este caso Colpensiones, respecto de situaciones ajenas a su responsabilidad o actuar, puesto que en dicho acto solo actuaron el afiliado, hoy demandante, y la administradora del régimen de ahorro individual.

En caso de que se confirme la sentencia solicita se establezca que debe devolverse a Colpensiones todos los valores de la cuenta de ahorro individual, incluyendo esto las cuotas de administración, el aporte para garantía de pensión mínima, los aportes destinados al pago de la prima de reaseguros de Fogafin, y los seguros de invalidez o sobrevivencia y en tal sentido, ordenar a las administradoras del Régimen de Ahorro individual, trasladar a Colpensiones estos valores con ocasión de la ineficacia declarada.

El apoderado de Porvenir S.A presenta alegatos de conclusión manifestando que dicha entidad al momento de realizar el traslado al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en

el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues, se le entregó a la parte actora la información del Régimen de Ahorro Individual en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, otra reunión de forma personal al momento de suscribir el Formulario de Afiliación y finalmente dentro del mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, y que frente a la entrega de aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte accionante pues, esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia.

Que La obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014.

Que además debe tenerse en cuenta también el incumplimiento de la parte accionada del deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, lo anterior queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante, pues está dentro de su interrogatorio de parte, manifestó en diferentes ocasiones, no haber realizado comparaciones con otros Fondos Pensionales, no haber hecho preguntas o indagaciones en el momento de suscripción del formulario y no hacer uso de los diferentes canales de atención al usuario que tiene mi representada.

Por último, indica que es improcedente la devolución de los gastos de administración, y seguros.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si la sociedad PROTECCIÓN S.A. debe trasladar los gastos de administración y seguros previsionales; iii) En caso de confirmar el traslado de los anteriores conceptos, se deber establecer el periodo que le corresponde trasladar a la sociedad PROTECCIÓN S.A..Y en el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a ordenarle a PROTECCIÓN S.A. la devolución de los gastos de administración, seguros previsionales indexados y ADICIONAR la sentencia para ordenarle la devolución de los descuentos realizados por Garantía de Pensión Mínima; ii) Si hay lugar a adicionar la sentencia, ordenándole a las sociedades COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a trasladar las a Colpensiones los gastos de administración y seguros previsionales indexados por el tiempo que la demandante realizó aportes en dichos fondos; iii) Si hay lugar a revocar la orden de trasladar bonos pensionales.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante no es beneficiaria del régimen de transición, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 34 años de edad al haber nacido el 26 de julio de 1959 (fl. 17); cotizó al ISS desde el 7 de mayo al 30 de junio de 1987 (fl. 30); según el historial de vinculaciones de fl 99, la demandante se trasladó a COLFONDOS S.A. el 14 de julio de 1994, se trasladó a PORVENIR S.A. el 5 de agosto de 1995, regresó a Colpensiones el 8 de enero de 2009, se trasladó a COLFONDOS S.A. el 26 de diciembre de 2001 y se trasladó finalmente a PROTECCIÓN S.A. el 27 de septiembre de 2012.

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que se afilió voluntariamente a COLFONDOS S.A. en 1994 y posteriormente en diciembre de 2001; se trasladó de PORVENIR S.A a Colpensiones el 24 de febrero de 1998 porque estaba estudiando medicina y para entrar a rotar le exigieron que debía vincularse a un fondo de pensiones

y salud; cuando se trasladó a los fondos privados ella sabía que eran diferentes al ISS; en el traslado de 1994 se hizo una reunión de carácter administrativo en una recepción, les dijeron que el ISS se iba a acabar que sus pensiones se iban a perder y les hablaron de los fondos privados; en el año 2001 con el traslado a COLFONDOS S.A. no le dijeron que sus aportes se depositarían en una cuenta de ahorro individual, no le hablaron de rendimientos, no le dijeron que el reconocimiento de la pensión de vejez dependía del capital acumulado; cuando hizo los cambios no le informaron nada; en 1994 la información fue muy poca. Al momento de la afiliación a COLFONDOS S.A. no le explicaron lo que pasaría con los aportes que tenía en el ISS.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**” (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994 permite al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada **COLFONDOS S.A. (que es la entidad que realizó el traslado de régimen pensional)**, no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se vulnera el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no

pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad COLFONDOS S.A. aporte formulario de vinculación, certificado de fecha de vinculación, historial de vinculación (fls. 152 a 159), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado y la orden dada de trasladar a Colpensiones las cotizaciones, rendimientos que se hubieran causado.

2. De los efectos de la ineficacia

- Frente a la devolución de las **cuotas de administración debidamente indexados**, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece las sentencias SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos lo ahorrado o se hubiere hecho pagos posteriores a la cotización, no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron y fueron administrados por la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 17595 de 2017 y SL 4989 de 2018, en donde se rememoró la sentencia 31989 de 2008 en la cual se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.”*

Como consecuencia de lo anterior, se ADICIONARÁ la sentencia, en el sentido de ORDENARLE a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas, por el tiempo que la demandante realizó aportes en cada uno de dichos fondos.

Igualmente se ADICIONARÁ la sentencia, en el sentido de ORDENARLE a las sociedades COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora, tales

como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas, por el tiempo que la demandante realizó aportes en cada uno de dichos fondos.

- Frente al **porcentaje de garantía de pensión mínima** considera la Sala que **debe ser devuelto** a Colpensiones, teniendo en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a las sociedades COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. Y PROTECCIÓN S.A. pero a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, cada una de ellas, tuvo que trasladar dicho porcentaje a PROTECCIÓN S.A., por lo tanto es que se ADICIONARÁ la sentencia, ORDENÁNDOLE a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a devolver a Colpensiones el porcentaje de garantía de pensión mínima.

4. De la devolución del bono pensional

En lo que respecta a la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de devolver el bono pensional, se debe tener en cuenta que, previo al pago del bono pensional, existen unas etapas que se deben de generar, tal y como son: la emisión, expedición y finalmente la redención, siendo necesario precisar en este caso que, si bien es cierto que la redención normal del mismo sería a los 60 años, ellos es, para el **26 de julio de 2019** al haber nacido el 26 de julio de 1959, no existe prueba en el plenario de la emisión y redención del bono pensional. Y aunado a lo anterior, en el hipotético caso que se hubiere realizado la redención anticipadamente (de lo cual no hay prueba), debe anularse y devolverse a la oficina de bonos pensionales, para realizar el trámite al que haya lugar.

Con fundamento en lo anterior, la orden en mención se REVOCARÁ, para en su lugar indicar que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

Costas en esta instancia en la suma de \$908.526 a cargo de PROTECCIÓN S.A., por no haber salido avante los recursos de apelación interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia, en el sentido de **ORDENARLE** a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas, por el tiempo que la demandante realizó aportes en cada uno de dichos fondos.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia, en el sentido de **ORDENARLE** a las sociedades COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambas debidamente indexadas, por el tiempo que la demandante realizó aportes en cada uno de dichos fondos.

TERCERO: REVOCAR la orden de trasladar el bono pensional, para en su lugar indicar que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

QUINTO: Costas en esta instancia en la suma de \$908.526 a cargo de PROTECCIÓN S.A.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 098 del 08 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>